

IRLANDA Y LA RELIGIÓN DE ESTADO

IRLANDA ha dejado de ser católica. Esta frase, de corte azafista (por cierto que Azafía negó siempre la interpretación tajante que se dio a su frase, separada del contexto), revela una realidad política constitucional, pero no una realidad profunda de la conciencia de la mayoría del país, que sigue adscrita al catolicismo. En un referéndum celebrado el jueves 7 de diciembre, una considerable mayoría de votantes —721.003 a favor y 133.430 en contra, o sea, un 84 por 100 de los votantes; si se prefiere, una proporción de 5,4 por 1— decidieron la supresión de la cláusula confesional de la Constitución, contenida en el artículo 44. El texto que desaparece decía así: «El Estado reconoce la posición especial de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana como guardiana de la fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos». Al mismo tiempo, se aceptó la reducción de la edad mínima para votar —de veintiuno a dieciocho años—. Anotemos como hecho muy importante el de las abstenciones: la mitad del censo no ha acudido a las urnas, a pesar del insistente llamamiento del Gobierno y de los tres partidos políticos, favorables todos a la supresión de la cláusula de la confesionalidad.

QUIZA el análisis de las abstenciones sea más significativo que el de los votos expresados, o resulte paralelo. La intención directa de esta modificación constitucional era, sobre todo, la de reducir las barreras que pueden conducir a la unificación del Ulster —la Irlanda del Norte bajo dominio inglés— con la República de Irlanda. En el Ulster, los dos tercios de la población son protestantes, y de ser asumida la región por la República quedarían en una inferioridad de condiciones similar a la que sufren ahora los católicos, que es el origen de la guerra civil. La supresión de los privilegios de la Iglesia es, por lo tanto, un acto de conciliación, una mano tendida. La mayor parte del voto afirmativo, en consecuencia, se dirige a esa finalidad política y nacional de recuperar a los hermanos y el territorio perdido por la división británica del país. No está excluido, sin embargo, que la supresión de la confesionalidad tenga repercusiones en el interior del país. El primer ministro, Jack Lynch, ha indicado, en sus declaraciones posteriores a la votación, que el decisivo resultado «muestra una creciente disposición al cambio en las gentes de esta parte de Irlanda».

ESTE temor a que realmente la supresión de la cláusula suponga un cambio en las condiciones del país es la que ha dictado los votos negativos y una parte importante de las abstenciones. Es la oposición de los integristas, como el doctor Cornelius Lucey, obispo de Cork, o como el seglar Desmond Broadberry, un perito mercantil padre de diecisiete hijos, que dirige un grupo ultra y que fue detenido durante escaso tiempo en el día de la votación por escandalizar ante las urnas, impidiendo la libertad de voto. El grupo de Broadberry sostiene que la modificación constitucional supone abrir la vía «al divorcio, los contraceptivos y el aborto». Quizá no vaya muy descaminado, en el fondo. Por lo menos, en el aspecto de los contraceptivos. Es posible que de aquí a dos o tres años, ese difícil tema salte a un nuevo referéndum. La juventud de los nuevos votantes podría ser en ese caso más decisiva que la cláusula de confesionalidad, aunque la supuesta pérdida de los privilegios de la Iglesia dejarían a ésta sin posibilidad de vetarla.

EL polo opuesto de los abstencionistas representa a los que creen que la modificación constitucional es una pura fórmula y que realmente los privilegios de la Iglesia no van a desaparecer. La influencia de la Iglesia es muy fuerte en la sociedad de la República de Irlanda; no va a perder por esta modificación su cuasi monopolio en la censura de libros y películas, su oposición a los contraceptivos, sus dificultades

para los matrimonios mixtos (a los que, por ejemplo, les está prohibido adoptar hijos), su enorme importancia en el medio rural (en el cual la proporción de votos a favor de la modificación ha sido mucho menor que en las zonas industriales) ni tampoco en la enseñanza.

OTRA parte de abstencionistas la da los que estiman que la supresión de la cláusula no sirve a los propósitos para los que ha sido hecha. Es decir, que no va a adelantar nada en el camino de la reconciliación de las dos Irlandas, ni va a modificar de hecho el «status» de la Iglesia en el país y, por lo tanto, no valía la pena el esfuerzo de votar.

FINALMENTE hay otros que repudian el sistema de la pregunta del referéndum. Su ambigüedad. Votar la supresión de los privilegios de la Iglesia católica es una cosa, votar a favor de la reunificación de las dos Irlandas es otra, y el ciudadano, al que se obliga a votar o rechazar las dos mismas cosas en una sola cuestión, se encuentra en contradicciones de conciencia notables. Es generalmente el defecto de los referéndums —un defecto que la mayor parte de las veces no es involuntario, sino una mezquindad de quienes lo convocan— y el que le achacan muchos de los partidarios de la democracia pura. Un referéndum no permite una matización de opiniones, no cabe más que el Sí y el No —sin todas las variantes que puede dar una discusión parlamentaria y una opinión pública abierta, por ejemplo—, y fuerza, en cierto modo, una respuesta. No cabe duda de que los habitantes de la República de Irlanda desean en gran parte la unificación con el Ulster, pero muchos de ellos no desean la pérdida de privilegios de la Iglesia. Como puede existir el caso contrario de los que quieren que el Estado pierda enteramente su confesionalidad y, al mismo tiempo, no consideran que la unión del Ulster sea una solución aceptable. De estas personas sale un gran número de abstencionistas: los que no quieren aceptar la ambigüedad obligada del sistema.

LA propia Iglesia católica no ha adoptado una posición unida frente a esta cuestión. Si algunos —como el obispo de Cork— representaban un integrista contrario a la separación de Iglesia y Estado, otros obispos la favorecían. Entre ellos, el primado de Irlanda —que lo es no sólo de la República, sino también del Ulster—, cardenal Conway, que desde hace varios años está declarándose «no opuesto» a la pérdida de privilegios de la Iglesia católica. Pero no precisamente por la cuestión, sino por el aspecto mucho más directo e importante de las relaciones Iglesia-Estado, viejo conflicto mundial que aparece a partir de la conversión de Constantino y que, es obvio indicarlo, no se ha resuelto bien nunca.

PERO la cuestión tiene un aspecto inverso. Irlanda deja de ser oficialmente católica, pero, ¿dejará el Ulster de ser oficialmente, en su mayoría, protestante? Sería preciso para ello que el Reino Unido de la Gran Bretaña cediese su religión de Estado, que es, como su propio nombre indica, la anglicana. La Iglesia de Inglaterra tiene considerables privilegios, a partir del de la coronación de la Reina y el escaño de sus obispos en la Cámara de los Lores. La supresión de la confesionalidad del Estado en Gran Bretaña sería una impensable revolución. No hay ninguna posibilidad. Solamente que se produce una curiosa paradoja: en el Estado confesional británico, la Iglesia anglicana tiene poca o ninguna influencia en la vida de la sociedad, en tanto que instrumento de coacción o de dirección material de la vida, mientras que en la República de Irlanda, a pesar de la supresión del artículo 44, va a continuar teniendo una gran influencia.



El Presidente de Irlanda, Eamon de Valera, noventa años, en el instante de depositar su voto en el referéndum que, simultáneamente, decidía la confesionalidad de la Constitución y la edad mínima necesaria para el voto. Pese al ejemplo y a las insistentes llamadas del Gobierno, la mitad del censo no ha acudido a las urnas.

Lo que hace pensar todo esto es que la confusión en el espinoso caso del Ulster no solamente no ha desaparecido, sino que tiende a aumentar. El conflicto tiene tres planos: un plano nacionalista histórico, que parte de la división del país por los británicos de una manera artificial y que ahora se presenta como un deseo de reunificación; otro plano de tipo religioso, que parte del éxodo de las familias católicas del Ulster hacia Irlanda y de la repoblación de la zona con protestantes, y un tercer plano, que es el de un sector artificialmente empobrecido, que lucha fieramente contra una clase dominante. Este último es el plano real actual, aunque los otros dos sean sus disfraces o sus antecedentes históricos. Es indudable que si los católicos del Ulster hubiesen sido tratados desde el principio en igualdad de condiciones y con identidad de opciones no habrían formado, como forman hoy, una clase social oprimida, y no estarían en pie de guerra y no existiría la confusión confesionalidad-nacionalidad, que distrae de las causas reales del conflicto. Los protestantes responden generalmente que el empobrecimiento de los católicos se debe a su propia confesionalidad, que les fuerza a una natalidad desmesurada y les hace conservadores y reacios a las formas de progreso. La «solución Lynch» no parece que añada nada a la realidad de la cuestión. Otro caso es el de la revisión Interior de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Presentado como ha sido en este referéndum, de una manera absolutamente impura, tampoco resuelve la cuestión. Aunque es posible que, a la larga, tenga efectos colaterales imposibles de predecir ahora.

(Véase en las páginas 14-17 de este número un trabajo de Méndez Ferrín a propósito de Irlanda y del Ulster.)

LARGO VIAJE DE ALLENDE

Salvador Allende está ahora en Cuba, devolviendo a Fidel Castro su visita a Chile. Cuatro días en la isla, en el viaje de regreso a su país después de un viaje de dos semanas y 35.000 kilómetros por numerosos países. El viaje era una demostración de confianza: podía dejar Chile en manos de los militares que ocupan algunos de los puestos clave del Gobierno. Chile, que hace cuarenta días estaba al borde de la guerra civil, fue repentinamente pacificada cuando el general Prats se hizo cargo del Ministerio del Interior, y no se ha movido durante la ausencia del Presidente.

El viaje de Allende tiene dos vertientes. Una es política; otra, económica. Da la sensación de que Allende, en el aspecto político de su viaje, quiere intentar una vez más la difícil aventura de encabezar un movimiento redentorista del «tercer mundo», que desde hace años ha desgastado a tantos grandes dirigentes. Sus palabras en algunas etapas del viaje y su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas tenían esa intención. Al denunciar el «bloqueo invisible» de su país y la colusión entre las grandes empresas de los Estados Unidos y el Departamento de Estado llevaban una intención más larga que la de la defensa de Chile, y fueron especialmente aplaudidas y comentadas por otras naciones que se consideran víctimas de esa misma gran maniobra. No está excluido, sin embargo, que Allende haya podido tener algún contacto directo o indirecto con el Gobierno de los Estados Unidos; quizá en Méjico, donde su visita coincidió, más o menos, con la de Ronald Reagan —enviado especial de Nixon—, quizá en Nueva York.

Los tiempos no son buenos para este tipo de defensa. En la etapa económica más importante de su viaje, la de Moscú, se ha encontrado Allende con la dificultad de hablar con los soviéticos del problema del cobre; o, más que de hablar —sin duda, el tema ha sido tratado en las conversaciones—, de encontrar soluciones. La URSS no desea ahora encontrar ningún motivo de fricción con los Estados Unidos. Pero la URSS está ayudando

a Chile, y parece que la ayuda se va a aumentar. Las conversaciones han sido especialmente cordiales. Estaban previstas dos reuniones —con Breznev, Kossiguin y Podgorny— y se ha celebrado una tercera no programada. Esta ha sido una sorpresa; otra ha sido la incorporación a las charlas del secretario general del Partido Comunista chileno, Luis Corvalán, que no formaba parte de la delegación oficial, pero que se encontraba en Moscú en ese momento en lo que se considera viaje privado. La actual ayuda de la URSS a Chile se estima en 293 millones de dólares en los dos años pasados, de los cuales, 50 en efectivo y los demás en línea de crédito. El comercio entre los dos países ha sido de 7,7 millones de dólares en el año pasado; en los seis años anteriores al gobierno de Unidad Popular no había pasado, en total, de unos dos millones. Hay, por otra parte, un acuerdo comercial que estipula la adquisición de 130.000 toneladas de cobre chileno por la URSS y de 87 millones de dólares en productos del cobre durante los próximos tres años. Chile ha solicitado también de la URSS ayuda técnica y material para el establecimiento de industrias, la mejora de la agricultura, las pesquerías y las minas. Es este último punto el que plantea mayores dificultades. La URSS no querría que sus técnicos ocuparan el puesto que han dejado vacante los técnicos de los Estados Unidos, por las razones antes mencionadas de la coexistencia. Toda esta ayuda es imprescindible para Chile: el cambio brusco de estructuras económicas producido por el nuevo régimen, el bloqueo de las grandes agrupaciones de capital dominadas por los Estados Unidos y la retracción del dinero chileno ha producido una situación difícil, una inflación muy considerable, un saldo muy negativo en la balanza de pagos y la necesidad de importar productos alimenticios se ha acentuado; se calcula que durante el año próximo esas importaciones supondrán unos setecientos millones de dólares. ■ JUAN ALDEBARAN.